

## **Cesión de datos en procedimiento judicial sin consentimiento del afectado. Informe 0479/2005**

La consulta plantea si resulta conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, la cesión de datos personales referidos al consultante, sin su consentimiento, en el ámbito de un procedimiento judicial del que es ajeno, con ocasión de una pieza separada de ejecución provisional de sentencia en un asunto mercantil.

Según indica dicho consultante, la comunicación de sus datos se ha realizado sin que el órgano judicial correspondiente haya seguido las cautelas establecidas por el artículo 95 h) de la Ley General Tributaria.

### **I**

El contenido de la consulta se concreta en la cuestión relativa a si procede la comunicación a la autoridad judicial de los datos que sean solicitados por la misma para su aportación a un determinado proceso o si, por el contrario, es posible oponerse total o parcialmente a dicha aportación, solicitándose del Órgano Jurisdiccional la concreción de los datos que efectivamente son de necesaria aportación, en el supuesto de que dichos datos pudieren referirse a la persona de un tercero, ajeno al correspondiente proceso judicial.

Dado que la consulta se refiere a datos obrantes en poder de la Agencia Tributaria, será preciso analizar si la cesión de los dichos datos, referentes al consultante, resulta conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal.

En este sentido, en el ámbito tributario, el artículo 95.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, actualmente en vigor, dispone que “1. Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto:

(...)

La colaboración con los jueces y tribunales para la ejecución de resoluciones judiciales firmes. La solicitud judicial de información exigirá resolución expresa en la que, previa ponderación de los intereses públicos y privados afectados en el asunto de que se trate y por haberse agotado los demás medios o fuentes de conocimiento sobre la existencia de bienes y derechos del deudor, se motive la necesidad de recabar datos de la Administración tributaria”.

### **II**

La transmisión de la información a la que se refiere la consulta constituirá una cesión o comunicación de datos, definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999 como “Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”.

En este caso, el artículo 11.1 de la Ley dispone que “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. No obstante, será posible la comunicación de los datos en caso de que una norma con rango de Ley otorgue cobertura a la comunicación planteada.

Sentada esta premisa, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 11.2. d) de la Ley Orgánica 15/1999, se establece igualmente, por vía de excepción, la posibilidad de realizar este tipo de cesiones, sin que concurra el consentimiento del afectado, “Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. Tampoco será preciso el consentimiento cuando la comunicación tenga como destinatario a instituciones autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas”.

De lo dispuesto en el precepto transcrito se desprende que, con carácter general, siempre que una autoridad judicial considere necesaria la aportación de datos personales obrantes en poder de la Agencia Tributaria, en los términos que el propio Órgano determine, será necesario aportar dichos documentos, pudiendo resultar la decisión de la entidad a que se solicitara la información de no facilitarla o facilitarla parcialmente, contraria a lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución, a cuyo tenor “Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto”.

En consecuencia, aún en el supuesto de que los datos personales requeridos por el Órgano judicial excedieren de los referidos a las partes de un proceso, dicha cesión se encontraría amparada por lo dispuesto en el transcrito artículo 11.2. d) de la Ley Orgánica 15/1999, sin perjuicio de la utilización de la reserva a favor del consultante de las acciones y recursos que en derecho pudieren corresponderle ante el Órgano Judicial, cesionario de dicha información, que a su vez la pone a disposición de las partes en litigio.

### III

En otro orden de cosas, es criterio reiterado de esta Agencia que dicho tipo de cesiones quedan amparadas por el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999, para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrada por el artículo 24 de la Constitución.

En este sentido, la Constitución Española de 1978, en su artículo 24.2, garantiza el “derecho de todos a ser informados de la acusación formulada contra ellos”, información que, de acuerdo con los principios generales que rigen la actividad punitiva del Estado, tanto en el ámbito penal, como en el administrativo, debe abarcar el conocimiento por parte del encartado del hecho punible o acto sancionable objeto de imputación, así

como de las circunstancias de hecho concurrentes que pudieran afectar a su derecho de defensa.

Atendiendo al contenido de los preceptos a que se ha hecho mención, contenidos tanto en la propia Constitución Española, como en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, existirá una habilitación legal suficiente para el tratamiento y cesión de los datos personales correspondientes a los terceros a los que se refiere la consulta, sin necesidad de recabar su consentimiento.